



**HONORABLE JUEZ
DÉCIMO (10) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.**

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA.
REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA.
RADICACIÓN: 76001-33-33-010-2021-00174 -00
ACCIONANTE: PAOLA FERNANDA LOZANO RAMIREZ Y OTROS
ACCIONADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.**

RUBER ZAPATA CARDONA, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 16.717.822 expedida en Cali, Abogado titulado y en ejercicio de la profesión, portador de la Tarjeta Profesional número 300.118 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme al poder adjunto al proceso, de manera atenta descorro el traslado para contestar la Demanda que en ejercicio del medio de control de REPARACIÓN DIRECTA ha sido incoada en esta jurisdicción pretendiendo se declare responsabilidad patrimonial en contra del Ente territorial Distrito Especial de Santiago de Cali, en virtud del presunto accidente ocurrido día 21 de octubre de 2019 entre las 21:00 y las 21:30 de la noche aproximadamente, mientras la señora PAOLA FERNANDA LOZANO RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía número 31.484.077, se encontraba conduciendo el vehículo de placas CIE74E sobre la calle 25, entre carreras 95 y 99 (posición inicial, posición final) de la ciudad de Cali, cuando, como resultado de un hueco en la vía, la conductora perdió el control sobre el vehículo, lo cual conllevó al volcamiento y posteriores lesiones, en los siguientes términos:

FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS:

El Distrito de Santiago de Cali no es responsable de los presuntos perjuicios causados a la señora Paola Fernanda Lozano Ramirez y otros, como consecuencia del aparente accidente de tránsito, que según se narra en la demanda tuvo ocurrencia el día 21 de octubre de 2019 entre las 21:00 y las 21:30 de la noche aproximadamente, la demandante manifiesta conducía la motocicleta de placas CIE74E sobre la calle 25 con carreras 95 y 99 (posición inicial, posición final) en la ciudad de Cali, cuando como consecuencia de un hueco en la vía, la conductora perdió el control del vehículo, lo cual conllevó al volcamiento y posteriores lesiones.

Como se puede observar la demanda además de no ser clara y precisa, carece de material probatorio que dé certeza sobre la veracidad de los hechos planteados; hechos que conforme al escrito de la demanda ocurrieron el día 21 de octubre de 2019. En la demanda se exhibe como prueba principal el informe de tránsito No.A000512652 elaborado por el agente de tránsito José Luis Murillo, de placa No.361 adscrito a la Secretaría de Movilidad de Cali, se estipuló en el acápite “Hipótesis del accidente de tránsito”, el código 306 indicador de hueco en la vía, planteando como hipótesis la causa del accidente en igual sentido en el acápite se evidencia el código 306 seguido de la expresión “huecos” hipótesis que se expone por parte del agente a través de un informe que carece de los presupuestos y requisitos que enmarcan los artículos 148 y 149 del Código Nacional de Tránsito; además que el agente de tránsito como lo dice la demanda elaboró el informe de accidente el día 22 de octubre de 2019 a las 11:45 de la mañana



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

quince (15) horas después del supuesto accidente, o sea que al agente no le consta ningún hecho y la narración es solo de oídas.

Se logrará evidenciar en el transcurso del proceso que no existen pruebas que confirmen y demuestren que las lesiones presentadas por la señora Paola Fernanda Lozano Ramirez, ocurrieron como consecuencia de la responsabilidad antijurídica del Distrito de Santiago de Cali.

Por tal razón, me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, porque, como quedará demostrado en el transcurso del proceso, no existe relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño que sea imputable al Distrito de Santiago de Cali.

Conforme a lo dicho, las pretensiones que enmarca en su demanda la parte actora son infundadas, no se le puede imponer esa responsabilidad al Distrito de Santiago de Cali, teniendo como base situaciones que no gozan de un soporte probatorio. Reclamaciones en torno al lucro cesante, daños morales, no son del resorte de la Administración Distrital, no existe certeza respecto a los hechos que dieron origen a las lesiones de la señora Paola Fernanda Lozano Ramirez, mucho menos las hay respecto a la participación o responsabilidad del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, en el hecho generador de las mismas.

Las pretensiones solicitadas por la parte demandante además de ser infundadas y de no poder imponérselas al Distrito de Santiago de Cali, se exceden y no gozan de soportes que les den viabilidad. Si bien el H. Consejo de Estado ha fijado en su jurisprudencia unos parámetros para la indemnización de perjuicios, lo cierto es que la aplicación de los mismos, depende en gran medida de las pruebas con las cuales cuente el proceso respecto de las lesiones y las circunstancias en que se produjeron y como se observa el recaudo probatorio no da certeza.

Volviendo a lo plasmado en la demanda, la señora Paola Fernanda Lozano Ramirez, tasa en sus pretensiones perjuicios morales en la demanda, en calidad de afectada directa, de igual manera solicita perjuicios morales para quienes integran según su escrito su círculo afectivo, advirtiendo que la tasación que realiza desborda por completo los valores y parámetros establecidos por la ley en estos casos.

A modo de clarificar y dar cuenta que esas pretensiones además de infundadas, desbordan los parámetros que deben seguir en el evento de configurarse una responsabilidad directa y única, a continuación, se relaciona el cuadro que la legislación colombiana viene teniendo en cuenta para estos casos.

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES					
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil.	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100	50	35	25	15
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80	40	28	20	12
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60	30	21	15	9
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40	20	14	10	6
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20	10	7	5	3
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10	5	3,5	2,5	1,5

FRENTE A LO QUE SE DEMANDA:

Demandan los actores a través de apoderado al Distrito de Santiago de Cali, por FALTA O FALLA DEL SERVICIO, por omisión en el cumplimiento del deber legal de hacer mantenimiento preventivo, reparaciones y construcciones de la vía pública de tránsito vehicular, afirmando que es administrativamente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales causados a la señora Paola Fernanda Lozano Ramirez y a su núcleo familiar, como consecuencia de los hechos que indica ocurrieron el día 21 de octubre de 2019 entre las 21:00 y 21:30 de la noche aproximadamente por la calle 25 entre carreras 95 y 99 (posición inicial, posición final) en la ciudad de Cali, cuando según su relato sufre un accidente a causa del mal estado de la vía, haciendo referencia a la hipótesis del informe de tránsito.

FRENTE A LOS HECHOS U OMISIONES DE LA DEMANDA:

AL HECHO A Y PRUEBAS 1,2,3,4,5,6: No me consta, es un hecho que debe acreditarse en el proceso y que será valorado por el Despacho conforme a los documentos aportados por el demandante, toda vez que según lo narrado en la demanda manifiestan hechos sucedidos el día 21 de octubre de 2019 entre las 21:00 y 21:30 de la noche, pero el informe de accidente fue elaborado al día siguiente a las 11:45 de la mañana por versiones de la demandante, hechos que no le constan al agente de tránsito y él no puede establecer responsabilidades al Distrito Especial de Santiago de Cali por hueco en la vía, primero él no fue testigo del accidente y segundo no debe emitir juicios de responsabilidad como causa probable hueco en la vía.

Seguidamente narra la demandante que la posición inicial del supuesto accidente fue en la calle 25 entre carreras 95 y 99 (posición inicial – posición final), nos da a entender que conducía a exceso de velocidad pues fueron cuatro (04) cuerdas por las que se arrastró el vehículo sobre la vía. En cuanto a la motocicleta AKT, color blanco, modelo 2016, línea AKT 125, capacidad dos pasajeros, de placas CIE74E, al momento del supuesto accidente NO tenía vigente la Revisión Tecnomecánica por lo que no se descarta una falla mecánica, así lo prueba el certificado que descargó la demandante de la página del RUNT y aportaron a la demanda como prueba.

AL HECHO B Y PRUEBAS 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21: No me consta, por ser una actividad ajena a mi representado. El motivo de consulta reportado en la



historia clínica no puede constituirse como elemento de prueba para acreditar la existencia de lo ocurrido. Al ingreso a la entidad hospitalaria el paciente puede plantear el motivo de consulta que considere, sin que necesariamente corresponda a la realidad.

Quiere decir esto que tal registro médico no escapa del relato contenido en este hecho, no por coincidir a la realidad, sino porque los dos corresponden a la órbita subjetiva del demandante. Tanto la versión rendida en la clínica como en la demanda se fundamentan en manifestaciones subjetivas de las que no existe prueba objetiva para constatar su existencia, magnitud, condiciones temporales, etc.

AL HECHO C PRUEBAS 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 Y 42: No me consta ninguna de las manifestaciones realizadas por la parte actora en este hecho junto con las pruebas que presenta, toda vez que son ajenos a mi representado y carecen de soporte probatorio para poder constatar lo allí expresado. No cuenta con ningún respaldo probatorio para poder afirmar o desvirtuar lo narrado; por lo tanto, según lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso y conforme a los postulados probatorios que impone el régimen subjetivo de responsabilidad aplicable, deberá la parte demandante acreditarlo.

El demandante no debe hacer juicios personales endilgando responsabilidad patrimonial al municipio de Santiago de Cali, para eso existen etapas procesales donde el Despacho valorará las pruebas aportadas al proceso.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DEFENSA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

El apoderado de los actores de la presente demanda, plantea argumentos encaminados a endilgarle responsabilidad al Distrito de Santiago de Cali, respecto del accidente de tránsito que según los hechos ocurrió el día 21 de octubre de 2019 entre las 21:00 y 21:30 de la noche aproximadamente, por la calle 25 entre carreras 95 y 99 (posición inicial, posición final) en la ciudad de Cali.

Me opongo a todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas en el escrito de la demanda, pues carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad.

En el presente caso la contraparte no logra, siquiera de forma sumaria demostrar los elementos que configurarían la eventual responsabilidad en cabeza del Distrito Especial de Santiago de Cali, ni tampoco dar razón que justifiquen sus pretensiones. Ello, especialmente, porque no se aportan con la demanda pruebas de los elementos que pretende demostrar con el fin de generar la imputación al Distrito y, ni siquiera hay claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que supuestamente ocurrió el accidente de tránsito.

Así las cosas, evidenciando que no se constituyen las premisas fácticas que configuran los elementos de responsabilidad que se pretende endilgar al Distrito de Santiago de Cali y no hay prueba alguna que pueda soportar sus pretensiones, me opongo a la prosperidad de todas y cada una de ellas por considerarlas improcedentes.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Como es bien conocido, el primer elemento de responsabilidad del Estado que debe ser acreditado y analizado es la existencia del daño, pues sin éste no hay necesidad de entrar a hacer un reproche a la conducta de la entidad demandada.

En el caso que nos ocupa, la parte actora no logró, ni logrará probar el daño que alega en esta demanda, pues no existe prueba tendiente a tal fin.

Observada la relación de hechos y pretensiones entregada por los demandantes, existe plenamente una ausencia de material probatorio que involucre o determine de manera contundente una responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali en las lesiones presentadas por a la señora Paola Fernanda Lozano Ramirez.

El apoderado de los actores de la presente demanda, plantea hechos frente a los cuales no existe prueba alguna que dé soporte de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; no existe prueba que indique y que acredite las causas del supuesto accidente. Manifiesta que la víctima fue trasladada en ambulancia a la clínica VALLE DEL LILI en la ciudad de Cali, donde la valoraron.

La demandante señora Paola Fernanda Lozano Ramirez, allegó historia clínica la cual reposa en esta demanda como elemento probatorio, estas expresiones pueden dar fe de las lesiones presentadas en el cuerpo de la convocante sin que se pueda colegir o afirmar que estas sean producto de un accidente de tránsito; todo se desprende de lo aseverado en la demanda sin que medie información de una autoridad que constate la ocurrencia del hecho, dando claridad sobre tiempo, modo y lugar del mismo, que evaluara los motivos del supuesto accidente por lo cual las lesiones presentadas por la señora Paola Fernanda, no se pueden atribuir como consecuencia de un accidente de tránsito y mucho menos que los hechos sobrevengan de una responsabilidad atribuible al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

De acuerdo con la jurisprudencia, para la calificación de Fecha de Estructuración se debe tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1507 de 2014, Artículo 3º que define la Fecha de Estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral, como: *“Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral.”*

Dentro de los hechos y situaciones esgrimidas no se logra acreditar dentro del proceso la responsabilidad de la Administración Municipal que represento. En la solicitud de conciliación se manifiesta que el accidente se presentó por el mal estado de la vía, pero no tenemos conocimiento del hueco, irregularidad o daño en la vía; en la solicitud no se dan las características del hueco por el cual se imputa la responsabilidad del municipio,



se levantó un informe de tránsito que no puede dar claridad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del acontecimiento.

En el presente caso no se da la falla del servicio, la conductora de la motocicleta es quien estaba desarrollando una actividad riesgosa y peligrosa, la cual demandaba el máximo cuidado y pericia, constituyéndose la falta de precaución en la causante del accidente, pues la vía por donde presuntamente se desplazaba a la señora Paola Fernanda, es una vía amplia con buena señalización y buena visualización, luego es un descuido no conservar la distancia con otros vehículos y/o llevar una velocidad superior a la autorizada por el Código Nacional de Tránsito, le impidieron a la conductora de la motocicleta maniobrar y evitar el supuesto accidente.

Si bien se aportó una historia clínica que da fe de una asistencia médica, ello por sí solo no configura la existencia del daño, el cual, para el caso en concreto, ha sido presentado por el actor como daño por lucro cesante y daño moral. En este orden se evidenciará por qué no se logran probar en el presente caso:

Sobre el lucro cesante no hay prueba que acredite el mismo. El accionante no menciona siquiera si ejercía una actividad productiva o si tenía una ganancia cierta que se dejó de percibir. Igualmente, en la relación de pruebas documentales tampoco se solicita el decreto de alguna que esté enfocada a tal fin y, el objeto de prueba referenciado en los testimonios tampoco se centra en el lucro cesante solicitado. Por todo lo anterior, este daño que se predicaba no fue ni podrá ser probado en este proceso.

Para el caso, conforme al informe de tránsito, el accidente ocurrió entre las 21:00 y 21:30 de la noche aproximadamente. Lo anterior hace suponer que la información sobre la cual realiza su experticia se produce a partir de lo acotado y narrado por la víctima; el agente de tránsito, su percepción es un reflejo de lo que le narra el afectado. Ahora bien, hay que resaltar que en el informe de tránsito no se consigna ningún testigo del hecho por lo que cualquier persona llamada a dar cuenta de los hechos no es pertinente. Dentro de la información acotada, no se sabe el actor hacía donde iba, a qué velocidad se desplazaba, no se especifica cómo ocurre el accidente.

Observando las características de la vía, se hace notoria como causa del accidente, el exceso de velocidad que el actor imprime en su actuar. Al ejercer una actividad riesgosa como lo es conducir una motocicleta, la señora Paola Fernanda Lozano, se desplazaba a una velocidad superior a la permitida en un sector residencial, la cual debería ser no más de 30 kilómetros por hora, pues de haber transitado a una velocidad como la permitida por la normatividad aplicable a la materia, muy seguramente habría podido maniobrar de manera preventiva al enfrentarse a cualquier tipo de obstáculo y/o irregularidad en la vía, lo cual a todas luces no ocurrió, más aún cuando en el informe antes mencionado se infiere que la vía estaba seca y con buenas condiciones de visibilidad, traduciéndose todo lo anterior en una clara falta a lo enmarcado en el Artículo 74 de la Ley 769 de 2.002 que a la letra ilustra:

LEY 769 DE 2002 CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO

CAPITULO VIII. REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA.

Ver el Concepto del Min. Transporte 5849 de 2004



ARTÍCULO 50. CONDICIONES MECÁNICAS Y DE SEGURIDAD. *Por razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad.*

Ver Resolución Min. Transporte 7171 de 2002, Ver Resolución Min. Transporte 7730 de 2002

ARTÍCULO 51. REVISIÓN VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO. *Los vehículos automotores de servicio público, servicio escolar y de turismo, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica, y los de servicio diferente al servicio público cada dos años. Esta revisión estará destinada a verificar:*

- 1. El adecuado estado de la carrocería.*
- 2. Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente sobre la materia.*
- 3. El buen funcionamiento del sistema mecánico.*
- 4. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.*
- 5. Eficiencia del sistema de combustión interno.*
- 6. Elementos de seguridad.*
- 7. Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que éste opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos.*
- 8. Las llantas del vehículo.*
- 9. Del funcionamiento de la puerta de emergencia.*
- 10. Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del servicio público.*

PARÁGRAFO 1o. *Para efectos de la revisión técnico-mecánica, se asimilarán a vehículos de servicio público aquellos que prestan servicios como atención de incendios, recolección de basura, ambulancias.*

PARÁGRAFO 2o. *La revisión técnico-mecánica estará orientada a garantizar el buen funcionamiento del vehículo en su labor de trabajo, especialmente en el caso de vehículos de uso dedicado a la prestación de servicio público y especial.*

Ver la Resolución del Min. Transporte 3500 de 2005

ARTÍCULO 52. PERIODICIDAD Y COBERTURA DE LA REVISIÓN DE GASES. *La revisión de gases de vehículos automotores de servicio público se realizará anualmente y los de servicio diferente a éste, cada dos años. Los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión de gases al cumplir dos (2) años contados a partir de su año de matrícula. La revisión a los vehículos deberá realizarse en centros de diagnóstico automotor oficiales o debidamente autorizados.*

PARÁGRAFO 1o. *Los vehículos automotores de placas extranjeras, que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de gases.*

PARÁGRAFO 2o. *Las motocicletas, motociclos y mototriciclos estarán sujetas a lo previsto en el presente artículo.*



"ARTICULO 74. REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. Los conductores deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos:

En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales. En las zonas escolares.

Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.

Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.

En proximidad a una intersección."

CAPITULO V.

CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS.

ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS.

Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: **Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla** y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa. Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro. No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario. No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello. Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.

Ahora bien, entrándose de accidentes de tránsito, el competente para ello es el agente que cumple tal función como se desprende del artículo 148 del Código Nacional de Tránsito que a continuación se transcribe:

"ARTÍCULO 148. FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. En caso de hechos que puedan constituir infracción penal, las autoridades de tránsito tendrán las atribuciones y deberes de la policía judicial, con arreglo al Código de Procedimiento Penal.

"ARTÍCULO 149. DESCRIPCIÓN. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el agente de tránsito que conozca el hecho levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores, quienes deberán firmarlas y en su defecto, la firmará un testigo.

El informe contendrá por lo menos:



Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.

Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

Descripción de los daños y lesiones.

Relación de los medios de prueba aportados por las partes.

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.

En todo caso en que produzca lesiones personales u homicidio en accidente de tránsito, la autoridad de tránsito deberá enviar a los conductores implicados a la práctica de la prueba de embriaguez, so pena de considerarse falta disciplinaria grave para el funcionario que no dé cumplimiento a esta norma.

El informe o el croquis, o los dos, serán entregados inmediatamente a los interesados y a la autoridad instructora competente en materia penal..."

Para el caso que nos concita, es evidente que el Informe Policial de Accidentes de Tránsito No.A000 512652 del 22 de octubre de 2019 suscrito por el Agente José Luis Murillo con Placa No.361 adscrito a la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, no nos da mayor información, de hecho, se ausentan en él varios aspectos fundamentales: no se cuenta sobre las condiciones en que conducía la demandante su motocicleta, no se expresa nada respecto a la velocidad con la que conducía, en el ítem 8 correspondiente a si llevaba o no casco y chaleco reflectivo marca sí, pero la realidad es que es imposible esta manifestación porque la demandante llegó a la clínica a las 22:52 pm y el informe fue elaborado a las 11:45 am del día 22 de octubre de 2022, quince (15) horas después de ocurrido el supuesto accidente.

Cabe decir además que el croquis realizado por el agente de tránsito es muy ambiguo, no es claro, deja muchas dudas frente a las causas del accidente. ¿La hipótesis que termina planteando como causa del accidente es simplemente un reflejo de lo acotado por la víctima, se indica que fue a causa de un hueco sobre la vía sin determinar cuál fue el hueco?, ¿dónde estaba ubicado?, ¿la profundidad?, ¿ancho?, largo?, características que nos llevan a determinar la contundencia del supuesto obstáculo que ocasionó el accidente. Por lo expuesto, se denota que el informe de tránsito carece de los presupuestos que señalen con certeza las causas que dieron origen al accidente.

Al no haber estado en el momento del accidente, el Informe del Agente de Tránsito se basa en lo que supuestamente le cuenta la supuesta víctima o ciudadanos, pero de manera extraña presenta una prueba de embriaguez en ceros, omitiendo el requisito de presentar la segunda prueba de embriaguez toda vez que como lo indica la ley debe practicarse la primera para efectos de calidad en ceros y luego practicar la prueba de



embriaguez al conductor, como se puede observar solo presentaron una y se desconoce si se hizo o no la prueba de embriaguez, por lo que no debe tenerse en cuenta.

Está demostrado, según lo consignado en el mismo INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRANSITO (IPAT) No.A000 512652 del 22 de octubre de 2019, que su actuación en condición de autoridad de tránsito investido de funciones de policía judicial con arreglo al Código de Procedimiento Penal (artículo 202⁻³) para la atención de accidentes donde existan lesionados o muertos, no fue ajustado a la normativa, al incumplir los deberes que le impone la ley y el reglamento (*Código de Procedimiento Penal, Código Nacional de Tránsito, Manual de diligenciamiento del IPAT adoptado mediante Resolución No. 0011268 de 2012 por el Ministerio de Transporte*), omitiendo la práctica de los protocolos obligatorios establecidos para la policía judicial (*libro 11 del mismo código*) en materia de recaudo probatorio de cara a las diferentes acciones legales que el evento genera, lo que incluye la compilación y la rigurosa cadena de custodia de las pruebas que se hubieran podido obtener en ejercicio de sus funciones judiciales, como el bosquejo topográfico o relieve planimétrico (croquis) del mismo que habría señalado todas las evidencias y elementos materiales comprometidos en los hechos, el estado en que se habría encontrado la motocicleta lo que habría permitido establecer la forma de los daños del vehículo, e igualmente detectar los testigos naturales e imparciales que efectivamente habrían podido presenciar el evento, como tampoco se practicó el examen de beodez para verificar si se encontraba bajo los efectos del alcohol.

De esta forma, forzoso es concluir que de la actuación oficial del agente de tránsito no se puede inferir la más mínima claridad sobre la forma como ocurrió el hecho que produjo el daño, es decir, que no hay prueba oficial que demuestre que la motocicleta conducida por la señora Paola Fernanda Lozano cayó porque la vía en ese tramo según el informe se encuentra “*hueco en la vía*” y que producto de esa caída hubiera recibido lesiones en su corporalidad, así el agente de tránsito haya formulado una hipótesis del mismo, que por las razones ya expuestas debe resultar de plano inverosímil ante la vista del juzgador.

Al respecto, permítame Honorable Juez traer a colación, el pronunciamiento de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, Sentencia del ocho (8) de mayo de dos mil veinte (2020), Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00352-01(55980), Actor: DIANA CAROLINA DUQUE ACOSTA Y OTROS, Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-Referencia: REPARACIÓN DIRECTA:

“Temas: DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE VEHÍCULOS, NAVES O AERONAVES / motocicleta se volcó por la supuesta presencia de un hueco en la vía / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y DE SEÑALIZACIÓN – no se acreditaron las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos objeto de la demanda / IMPUTACIÓN – no se demostró que el daño alegado en la demanda fuese atribuible al Estado.

La Sala, después de analizar los medios de convicción que, en debida forma, se recaudaron en el proceso, concluye que, en el caso objeto de estudio, si bien se probó que Diana Carolina Duque Acosta sufrió unas lesiones consistentes en un trauma craneoencefálico leve y un esguince en el tobillo izquierdo, el 31 de enero de 2009, como consecuencia del volcamiento del vehículo en que se transportaba,



lo cierto es que se desconoce por completo cuál fue la causa del accidente de tránsito en mención, por las siguientes razones: i) el informe suscrito por el agente de tránsito Luis Garay no proporciona claridad en relación con la escena del accidente y ii) la Subsección no cuenta con otro elemento probatorio que le permita establecer las condiciones en las que resultó lesionada la víctima.

En efecto, el agente de tránsito Luis Garay suscribió el “informe policial de accidente de tránsito” y en el diligenciamiento del formulario informó que el 31 de enero de 2009, a las 11:20 horas, en la calle 13 con carreras 71 y 72, en el municipio de Santiago de Cali, se produjo el volcamiento de la motocicleta particular de placas IGK-82B, conducida por Diana Carolina Duque Acosta.

En relación con el lugar del accidente, especificó que se trataba de una vía recta, de doble sentido, con dos calzadas y con tres carriles, de asfalto y con buena iluminación.

Además, aunque dejó en blanco la casilla denominada “causas probables”, destinada a indicar las circunstancias o actuaciones que, posiblemente, dieron origen al accidente, en la casilla correspondiente a “observaciones” consignó lo siguiente: “hipótesis -> huecos en la vía”.

Consultado el plano o croquis del accidente, la Sala encuentra que el agente de tránsito Luis Garay se limitó a graficar la berma, la calzada, el separador, los postes de energía eléctrica, los árboles, el sentido de circulación y la presencia de un hueco en la vía, pero no se indicó la ubicación de la motocicleta siniestrada, el sitio en donde cayó la víctima Diana Carolina Duque Acosta, la longitud y/o trayectoria de las huellas de frenado ni las dimensiones del hueco, lo cual resulta contradictorio con la hipótesis anotada, pues el gráfico solo muestra un hueco y no varios.

En otras palabras, el agente de tránsito Luis Garay omitió señalar el punto de impacto y la trayectoria -anterior y posterior al volcamiento- del vehículo de placas IGK-82B, lo cual era indispensable para la reconstrucción y el análisis del accidente de tránsito acaecido el 31 de enero de 2009.

Incluso, el manual para el diligenciamiento del formato de este tipo de informes puntualiza que, en caso de que el vehículo hubiese sido movido de su posición final, el agente de tránsito debía diagramar este elemento en forma punteada e indicar en las observaciones el motivo por el cual se había movido del lugar de los hechos, lo cual tampoco ocurrió.

Para la Sala es evidente que el croquis en mención adolece de falencias, porque no consignó todos los detalles relevantes de la escena de los hechos. Incluso, aún con los aspectos que sí se graficaron, la información resulta insuficiente, por ejemplo, aunque el agente de tránsito Luis Garay advirtió de la presencia de un hueco en la vía, en el carril de la izquierda, en sentido sur - norte, lo cierto es que no indicó su profundidad, su ancho y/o su largo, lo que imposibilita a la Sala conocer sus dimensiones y, de esta forma, determinar en qué medida su presencia podía afectar la dirección y/o la velocidad de los vehículos que transitaban por ese sector.



La única información relevante que contiene el referido informe se encuentra en la casilla correspondiente a “observaciones”, en la cual se indicó lo siguiente: “hipótesis -> huecos en la vía”; no obstante lo anterior, con esta anotación no podría establecerse que lo que resultó determinante en la causación del daño fue la presencia de huecos en la calzada, porque, en primer lugar, en el croquis sólo se graficó un hueco y no varios y, en segundo lugar, no se probó de qué forma esa fisura en la vía afectó el desplazamiento de la motocicleta de placas IGK-82B, pues, se reitera, se desconoce por completo su trayectoria y su ubicación final en la escena de los hechos.

Adicionalmente, vale la pena precisar que, si bien en el manual para el diligenciamiento del “informe policial de accidentes” se establece que la autoridad de tránsito debe consignar, al menos, una causa probable del accidente, la hipótesis descrita no corresponde a un juicio de responsabilidad, pues su única finalidad es que el Ministerio de Transporte conozca las causas de accidentalidad y establecer correctivos para reducir el número de accidentes.

Así las cosas, ante la escasa información suministrada en el plano dibujado por el agente Luis Garay sería necesario acudir a la valoración de otros medios de convicción; sin embargo, no existe en el proceso otro elemento probatorio que permita confrontar el contenido del informe ni verificar cuál fue la causa eficiente del daño por el que aquí se demanda”.

Ahora bien, las acotaciones realizadas por el personal médico, dan cuenta de la asistencia recibida por la señora Paola Fernanda Lozano, estas expresiones pueden dar fe de las lesiones presentadas en el cuerpo del demandante sin que se pueda colegir o afirmar que estas sean producto de un accidente de tránsito, todo se desprende de lo aseverado por la víctima sin que medie información de una autoridad que constate la ocurrencia del hecho, dando claridad sobre tiempo, modo y lugar del mismo, que evaluara los motivos del supuesto accidente por lo cual las lesiones presentadas por la demandante, no se pueden atribuir como consecuencia de un accidente de tránsito y mucho menos que los hechos sobrevengan de una responsabilidad atribuible al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

No existe certeza o evidencia que dé cuenta del lugar exacto donde ocurrió el accidente mencionado por el demandante; la parte actora se limita a señalar una responsabilidad al Distrito de Santiago de Cali y que como consecuencia de ella se le condene a pagar unas sumas de dinero por perjuicios materiales, daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales, sin que se prueben las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon al mismo. En este orden de ideas, carece de sustento lo afirmado por el apoderado de la parte demandante en cuanto señala que el hecho implica una falla del servicio por parte de la Administración, lo cual le corresponde probar.

En la responsabilidad administrativa por falta o falla del servicio y de conformidad con los parámetros sobre los cuales fue inicialmente estructurada esa teoría, se dan tres elementos constitutivos esenciales, a saber: una falta o falla del servicio que debe ser plenamente acreditada; un daño y una relación de causalidad entre la falla y el daño. La esencialidad de esos tres elementos llega al extremo de que faltando uno de ellos no se configura la responsabilidad administrativa. En nuestro sistema, corresponde al interesado en la indemnización, probar la falla del servicio, la existencia del daño con todas las características que lo hacen indemnizable y la relación de causalidad.



El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el Artículo 90 de la Carta Política, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja responsabilidad a cargo del Estado.

En Sentencia del 5 de octubre de 2011, la Subsección C, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para resolver el asunto puesto a su conocimiento a través del recurso de alzada, interpretó el precitado texto Constitucional, señalando que¹:

"La responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, se fundamenta en dos elementos, a saber: i) El daño antijurídico y, fi) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico.

El inciso primero del texto constitucional antes señalado, es del siguiente tenor literal:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

"(...)"

Y es así, como la jurisprudencia de esta corporación lo ha entendido, diciendo lo siguiente:

Porque a términos del artículo 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para que, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público.

La objetivación del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión.

Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño, por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de este, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento.

Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores", el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño puesto que, si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

¹Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia 1997-04160 de octubre 5 de 2011 C.P. Olga Mélida Valle de La Hoz.



Así las cosas, es claro que la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado —en materia contractual y extracontractual—, contenida en el artículo 90 ibídem, se soporta única y exclusivamente en los elementos antes referidos de daño antijurídico e imputación.

La Corte Constitucional refiriéndose a la posición asumida por la sección tercera de esta corporación, ha precisado los alcances del inciso primero artículo 90 de la Carta, en los siguientes términos:

"Son dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas.

*La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar."*¹

Como se ha expuesto y siguiendo los lineamientos precisados en la citada jurisprudencia, se impone iniciar por analizar en este caso la existencia del daño, como elemento principal, que abre paso al estudio de los demás elementos, si se responde de manera positiva a la pregunta acerca de su existencia.

Frente al daño antijurídico

Ahora bien, en cuanto al concepto de daño, vale traer nuevamente a cita lo señalado en la obra "EL DAÑO", compilación y extractos José N. Duque Gómez:

"La certeza hace alusión a la verdad de su existencia, como concepto opuesto a todo lo que es hipotético, posible o eventual. Para que el daño sea indemnizable es requisito indispensable que sea cierto, verdadero e incuestionable."

"...Lo contrario a la certeza es la incertidumbre que se presenta cuando no hay seguridad sobre la real existencia del perjuicio que se invoca; se dice que el daño es incierto cuando los elementos de juicio de que dispone son insuficientes para sustentar su causación. En esta situación de incertidumbre el daño no es reparable y así lo tiene plenamente establecido nuestra jurisprudencia".

El criterio antes expuesto, encuentra consonancia con lo establecido en el artículo 167 del CGP, norma general del Régimen Probatorio, según la cual, *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."*

Es menester indicar que, en el presente caso, los perjuicios en relación con los cuales se pretende obtener indemnización, son los relacionados con la afección en la integridad física de la señora Paola Fernanda Lozano, materiales como inmateriales para él y su grupo familiar.



El anterior postulado deberá revisarse a la luz de las condiciones necesarias de pertinencia, conducencia y eficacia, para ostentar poder de convicción en relación con el hecho que se pretende probar. Estas condiciones pueden ser definidas así:

"La pertinencia o relevancia consiste en que haya alguna relación entre el medio probatorio y el enunciado fáctico que se pretende someter a prueba, de manera que pueda influir en la decisión correspondiente..."

"En virtud de la conducencia, respecto de un caso determinado, el medio de prueba debe encontrarse explícitamente autorizado, o no estar excluido expresa o tácitamente... La conducencia de la prueba no es cuestión de hecho, sino de Derecho, al encontrarse contemplada en la ley o no estar dispuesta restricción para su uso procesal; ya que legalmente puede recibirse o practicarse. La conducencia se predica de la prueba y la pertinencia de los hechos material del proceso; así, una prueba puede ser pertinente pero el medio propuesto puede no ser idóneo. Un documento privado o un testimonio no son legalmente idóneos para demostrar la venta de un bien inmueble, pues la ley exige escritura pública para su celebración (Devis 1981: 340; Parra 2007: 153)

"Prueba eficaz es la que resulta efectivamente útil para llevar a la convicción del juez, derivada de criterios de valoración racionales...En suma, la eficacia de la prueba se establece efectuada su valoración o apreciación."

En conclusión, no existe evidencia acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, de manera que difícil resulta concluir que las lesiones padecidas por la señora Paola Fernanda Lozano hayan sido consecuencia de esos hechos. Es más, ni siquiera existe prueba válida de la situación física del demandante.

En estas condiciones, no está demostrado el daño, elemento esencial para que la condena pretendida se abra paso, y por tanto, la decisión final debe resultar adversa a las pretensiones de la demanda.

Frente a la imputabilidad

Se pretende endilgar las consecuencias del presunto accidente que según cuenta los hechos de la demanda ocurrió el día 21 de octubre de 2019 al Distrito de Santiago de Cali, afirmando que *"al pasar sobre un hueco ubicado en dicho sector de la vía, lo cual le produjo la pérdida del equilibrio y caída desde su motocicleta"*

Correspondía entonces a la parte demandante, demostrar en este punto, que existió la falla en el servicio, que esta falla fue la causa que dio lugar al daño antijurídico generado, que era un obstáculo insuperable para el conductor, aspecto que no se han detallado o especificado por parte del actor.

En relación con el tema, el Consejo de Estado en sentencia de octubre de 1.995, Expediente 9535, señaló:

"Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal."



"Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acredita la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el cumplimiento de un deber y demostrar que dicha falla fue la causante del daño".

Se insiste que, la parte actora no demuestra en el presente proceso que en efecto existió la falla en el servicio, así como el nexo causal entre esta y el daño.

Y es que de aceptar como cierto la existencia de un hueco en la vía, ello no se traduce de manera automática en falla del servicio. Véase como en la actualidad, en diferentes zonas de la ciudad, encontramos huecos, baches, y desgastamiento asfáltico, que tienen como origen el mejoramiento vial que se ha emprendido por parte de la Administración, y que evidentemente no se le puede señalar como una falla del servicio, pues por el contrario, su naturaleza es la del cumplimiento de un deber legal.

En virtud de lo anterior, es claro que ninguna de las pruebas que se han pretendido hacer valer en el presente plenario tiene como objeto los antes señalados, lo que permite afirmar, que la falla en el servicio en esta instancia procesal no está probada.

Según los Artículos 164, 165 y 167 de la Sección Tercera, Régimen Probatorio, Título único Pruebas, Capítulo I del Código General del Proceso, establecen que:

"Art. 164 – Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegas al proceso.

Art. 165 – Medios de prueba. Sirven como pruebas la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

El Juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio.

Art. 167 – Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba."

CAUSALES DE EXONERACIÓN

CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

No obstante, se tiene que en el presente caso no existe la falla del servicio alegada, se invoca como causal de exoneración, en caso de posición en contrario, la culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad.

En efecto, una de las causas ajenas que se acepta como fenómeno liberador de la responsabilidad por ruptura del nexo causal es el hecho de la víctima, cuando es



determinante, cuando influye en el resultado y por ello tiene implicaciones diferentes en el campo indemnizatorio. Su participación puede influir en el resultado, en proporción a su causalidad, para el caso que nos ocupa, quien transitaba en la motocicleta era la señora Paola Fernanda Lozano, la cual debía conducir con cuidado, atención y precaución, también le exigía tener en buenas condiciones de mantenimiento la motocicleta, toda vez que estaba realizando una actividad peligrosa, la cual llevó a cabo a alta velocidad, lo que le impidió evitar el accidente con las consecuencias anotadas..

Es importante recabar que la conducción de este tipo de vehículos exige además una pericia de la persona que lo maneja, pues sus especificaciones técnicas y diseño permiten desarrollar altas velocidades, además que ofrecen alta inestabilidad, lo que no se compadece con la inseguridad que brindan estos vehículos para quien los utiliza, pues no poseen ningún sistema de seguridad adicional para la integridad de la persona distinta a la propia pericia y capacidad de maniobra de quien lo conduce.

La responsabilidad derivada de la práctica de actividades peligrosas o riesgosas se encuentra por completo desligada de toda consideración sobre la culpa o diligencia o prudencia de quien ocasiona el daño, con fundamento en el principio ubi emolumenta ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga), que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro.

La demandante ha pretendido hacer ver que existe relación entre el presunto accidente acaecido el día 21 de octubre de 2019 y la supuesta falla del servicio consistente en la existencia de un hueco en la vía. Esta postura resulta insostenible, en cuanto que no existe prueba que dé cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los hechos ocurrieron, constituyéndose lo anterior en simple manifestación carente de sustento que aún no ha sido debidamente probado por quien corresponde, es decir, por la parte demandante.

Es aquí donde debemos tener en cuenta la teoría de la causalidad adecuada, la cual sostiene que no todas las condiciones que concurren a un resultado adquieren la categoría de causas que originen la responsabilidad. Hay que separar, escoger, aquellos fenómenos, circunstancias, hechos que realmente fueron determinantes e influyeron en el resultado.

Si la conductora hubiese adoptado una conducta prudente y cumpliendo las normas del Código Nacional del Tránsito, es seguro que no se hubiese presentado el accidente o los daños hubiesen sido menores. La sana lógica nos deja pensar que la lesionada no tuvo el suficiente cuidado y precaución al transitar por la vía el día del accidente, pues el llevar una velocidad adecuada le hubiera permitido evitar riesgos.

La duda sobre la falla del servicio y aún más la duda sobre si fue esa presunta falla la causante del daño, no permite configurar el nexo causal que se exige para predicar responsabilidad de la Administración Municipal.

De igual manera, se puede inferir que estas violaciones al deber objetivo de cuidado que debe coexistir al momento de ejercer la actitud de conducir motocicleta, son determinantes en el resultado objeto de la indagación, son el nexo causal, así el no conducir con la velocidad permitida impide que en un determinado momento se pueda sortear cualquier situación en el normal tránsito en el uso de la vía, sin que se presente el accidente o que las consecuencias hubiesen sido menores, dado que la naturaleza



misma del ejercicio de conducir implica esto, puesto que se está frente a velocidad reacción, por lo tanto, es un acto de falta de cuidado y de incrementar su propio riesgo y por ende superó el riesgo permitido, lo cual aparejó los resultados mencionados, consecuencia que no se puede trasladar a otras personas o entidades, sino que es de su propia responsabilidad; que si hubiere sido fiel a los cánones que regulan esta actividad, no se hubiera presentado el accidente, consecuente con ello, se concluye que la falta al deber objeto de cuidado se debe pregonar es de la conductora de la motocicleta.

Vale traer a cita las precisiones de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Sentencia 1998-05970 de junio 9 de 2010, señalándose lo siguiente:

"2.2. El hecho exclusivo de la víctima como eximente de responsabilidad o causal excluyente de imputación.

"Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (1) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta sección ha sostenido lo siguiente:

"En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo —pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C., art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados —.

"Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

"La Imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vía.

"En lo referente a la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual 'no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia', toda vez que 'Prever', en el lenguaje usual, significa ver con anticipación', entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría



invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

"Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de "imprevisto" de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civiles y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual imprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia'. La recién referida acepción del vocablo "imprevisible" evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

"No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposos y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.

"Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras, acaeció con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo "inimaginable" de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

"Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico



en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración al menos con efecto liberatorio pleno de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada'.

"Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.

Teniendo en cuenta los hechos contentivos en el libelo de la demanda, tenemos que la conducta reúne las exigencias que la jurisprudencia ha determinado para que se constituya la culpa exclusiva y determinante de la víctima.

Denótese Honorable Juez, que la parte demandante no aportó una sola prueba idónea dirigida a indicar que la Administración a través de sus servidores, actuó en aras de que ocurrieran tan lamentables hechos, por ende, es plenamente claro que las presuntas lesiones sufridas por la señora Paola Fernanda Lozano pueden haber tenido como causa el actuar de la Administración, sino de manera exclusiva el actuar de Ella como conductora.

En este evento la señora Paola Fernanda Lozano, estaba realizando una actividad peligrosa donde debe actuar no sólo con diligencia y cuidado pues se responde hasta por la culpa levísima en que se pudo incurrir, como por ejemplo conducir un vehículo sin las mínimas medidas de prevención y sin acogerse a los límites de velocidad y no haber efectuado la revisión tecnomecánica determinados en la normatividad respectiva y así contribuir a su daño.

Sobre el particular se pronunció el Consejo de Estado, en los siguientes términos:

"Quien conduce debe prever aun aquellos eventos derivados de la imprudencia o inobservancia de los demás, ello tiene su límite en la razonable probabilidad del peligro y por ello no puede pretenderse del conductor la previsión de la remota posibilidad ; a él se le exige es una actitud síquica en la que prevea aquellos sucesos que se presentan con notorio grado de probabilidad, es decir, en lo que la ocurrencia del daño a un interés jurídico pueda ser evitada con su contribución activa; más allá de este límite su conducta se desplaza a lo fortuito o a la fuerza mayor" (Expediente No. 9722,



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Diciembre 9 de 1996, Consejero Ponente, Juan de Dios Montes Hernández, subrayado y negrillas propio).

Con la probanza aportada al expediente está claro que el Distrito de Santiago de Cali no es responsable del supuesto accidente de tránsito ocurrido el día 21 de octubre de 2019, en el que resultare accidentada la señora Paola Fernanda Lozano, puesto que no se puede atribuir de este ente, una irregularidad, omisión, negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. El hecho dañoso se presenta como resultado de la *“culpa exclusiva de la víctima”*, quien, de manera imprudente, e irresponsable decide realizar una actividad calificada como peligrosa.

En tal sentido, le correspondía a la señora Paola Fernanda Lozano, como a cualquier persona que decide realizar una actividad peligrosa, como es la conducción de vehículos (motocicleta en este caso), tomar las previsiones necesarias, en cuanto debe cumplirse con todas las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, con el objeto de no poner en riesgo innecesario su propia integridad física y hasta las de terceras personas. El conductor no actuó con el debido cuidado, el exigido cuando se encuentra en ejercicio de una actividad considerada por ser peligrosa y con ello provocó el resultado atribuible a su culpa.

De acuerdo con los hechos de la demanda y las pruebas que aporta la parte demandante, se puede inferir perfectamente que el causante del daño fue el propio autor al no acatar las normas de tránsito que se exigen para conducir esta clase de vehículos, además de no tener pericia para maniobrar el vehículo que conduce. Así mismo, conducía por una vía amplia con buena visibilidad, pudiendo disminuir la velocidad y/o maniobrar su motocicleta.

No hay que olvidar que el lesionado estaba desarrollando una actividad considerada como peligrosa (la conducción de motocicleta), y en el ejercicio de una actividad peligrosa como la desplegada por el actor le obliga a una razonable precaución. Es importante manifestar que la conducción de este tipo de vehículos exige además una pericia de la persona que lo maneja, pues sus especificaciones técnicas y diseño permiten desarrollar altas velocidades, además que ofrecen alta inestabilidad, lo que no se compadece con la inseguridad que brindan estos vehículos para quienes lo utilizan, pues no poseen ningún sistema de seguridad adicional para la integridad de la persona distinta a la propia pericia y capacidad de maniobra de quien lo conduce.

En el eventual caso en que el demandante se hubiese accidentado en el sitio que señala en los hechos, ello acaeció por su propia imprudencia, pues si hubiera respetado las normas de tránsito y tomado las precauciones debidas, era evidente que el accidente no habría ocurrido, pues estamos hablando de una vía amplia, plana, recta, con buena visibilidad y señalización.

Por todas las anteriores consideraciones, es que se considera que la falla del servicio no está probada, no existe nexo causal eficiente y se desconocen las circunstancias que rodearon el accidente, siendo de otro lado clara la participación de la víctima en el desarrollo de una actividad peligrosa. Respetuosamente solicito al H. Despacho Judicial, se NIEGUEN las pretensiones de la demanda, y se EXONERE de toda responsabilidad al ente territorial Distrito de Santiago de Cali.

PRUEBAS

Solicito se me autorice contrainterrogar a la señora PAOLA FERNANDA LOZANO y a los testigos de la parte demandante en las audiencias respectivas, para la recepción de testimonios que sean decretados por su Despacho.

Solicito se cite al agente de tránsito JOSE LUIS MURILLO, placa 361 adscrito a la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, con el objeto de que rinda declaración con respecto al Informe de Accidente de Tránsito, por él elaborado.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA:

En escrito separado, con el fin, se hagan parte en el presente proceso, me permito formular Llamamiento en Garantía a las Compañías ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CHUBB SEGUROS COLOMBIA, SBS SEGUROS, HDI SEGUROS quienes aparecen en la póliza de Responsabilidad Civil N°420-80-994000000109 con vigencia del 29/05/2019 hasta el 23/04/2020 con una participación cada una del 35%, 30.00%, 25.00% y 10.00%, respectivamente.

ANEXOS:

Los siguientes documentos:

1. Poder a mi conferido por la Jefe de Oficina de la Dirección Jurídica de la Alcaldía.
2. Copia del Acta de Posesión y Decreto de nombramiento de la Jefe de Oficina de la Dirección Jurídica de la Alcaldía.
3. Escrito del Llamamiento en Garantía a las Compañías ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CHUBB SEGUROS COLOMBIA, SBS, HDI SEGUROS y sus anexos.
4. Copia de la contestación de la demanda para el traslado del Llamado en Garantía
5. Copia de certificado de existencia y representación de las Compañías ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CHUBB SEGUROS COLOMBIA, SBS, HDI SEGUROS expedidas por la Cámara de Comercio de Cali, donde se identifica en cada una su domicilio para efectos de notificación.

El suscrito, como apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali, las recibiré en la Secretaría de Infraestructura Municipal ubicada en el CAM, Torre Alcaldía, Piso 12. Correo electrónico ruberzc@hotmail.com celular 3104315460.

Por instrucciones de la Dirección del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, las actuaciones dentro del proceso serán remitidas a través del correo oficial ejercicio.defensa01@cali.gov.co

De otro lado, el buzón oficial para la recepción de notificaciones del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme lo dispone el art. 197 del CPACA, es notificaciones.judiciales@cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Las compañías objeto del llamado y su representante legal, las recibirán en las direcciones indicadas en los certificados de existencia y representación expedidos por Cámara y Comercio.

De la señora Juez,

Atentamente,

RUBER ZAPATA CARDONA

C.C. No 16.717.822 de Cali

T.P. N° 300.118 del C.S de la Judicatura